

Se disculpan por la masacre zeta en Allende, pero nadie indemniza

LAURA SÁNCHEZ LEY, CDMX

Los gobiernos federal y de Coahuila no han dado tal paso a 12 años de la incursión criminal que arrasó con ese pueblo. PÁG. 18

Los gobiernos federal y estatal se niegan a asumir cualquier responsabilidad: en la CEAV explican que el caso es del fuero común, por lo que no puede interceder, y las autoridades de la entidad alegan que simplemente “no tienen dinero”

Allende, Coahuila

A 12 años de la masacre zeta, disculpas pero ninguna indemnización

Reportaje

LAURA SÁNCHEZ LEY
CIUDAD DE MÉXICO

A 12 años del bestial ataque de *Los Zetas* en la comunidad de Allende, Coahuila, los gobiernos federal y estatal se “echan la bolita” y ninguno asume la responsabilidad de compensar a los afectados, quienes acusan a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de no cumplir con la promesa de reparar los daños. Las disculpas han sido muchas, pero las indemnizaciones no llegan.

Fue el 27 de junio de 2019 cuando la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llegó al centro de aquella localidad, una plaza austera y de arbolillos secos, donde desfilaban funcionarios trajeados con cara de congoja. Estaban ahí, dijeron, para ofrecer disculpas a los sobrevivientes de una de las peores masacres en la historia del país, quienes tenían la esperanza de recibir apoyo psicológico o una compensación económica, luego de que sus casas y ranchos fueron destruidos por capricho de *Los Zetas*.

La peligrosa organización criminal, nacida en 1997 a partir del cártel del Golfo, en 2011 decidió torturar, asesinar y despojar a cientos de habitantes de ese pe-

queño municipio enmarcado en una tierra desértica que llega a alcanzar los 50 grados celsius en verano y los -15 en invierno.

“No se trata de un evento protocolario, sino de una convicción personal e institucional”, dijo en aquella ocasión Sánchez Cordero. A su lado estaba Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, cabizbajo y con cara de congoja. También se encontraba el gobernador Miguel Riquelme, quien con el ceño fruncido movía la cabeza mientras lanzaba palabras de indignación.

Vinieron las disculpas. No a la repetición, decían. Hubo frases sonoras, como: “El Presidente nos instruyó a ver a las víctimas a los ojos”, pero a los familiares se les quedó grabado algo más tangible. En su discurso, la titular de Gobernación aseguró que apoyarían con lo que fuera necesario para garantizar el derecho de reparación del daño a las víctimas.

La negativa

MILENIO tuvo acceso a documentos judiciales y correos electrónicos que revelan que la CEAV se ha negado a reparar tal daño, pese a las promesas transmitidas por televisión. ¿Cuál es la justificación para no cumplir la promesa? Que simplemente no le toca a esa comisión hacerlo.

Ahora que no hay flashes ni cámaras, surgen otros argumentos. A través de un recurso de revisión presentado el 7 de septiembre de 2023 ante un tribunal, la CEAV sostiene que los hechos trágicos ocurrieron por culpa de autoridades del fuero común, por lo que son estas las que deben reparar el daño causado.

“La CEAV fue creada específicamente para garantizar, promover y proteger los derechos de la víctima a nivel federal, por lo que para la atención de las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal



se crearon las comisiones estatales”, explica en el documento legal que hace parte del juicio de amparo 440/2023.

Este argumento se contrapone al acuerdo de 2017, por medio del cual la CEAV ejerció la facultad para brindar ayuda y cubrir con una compensación a las víctimas de la masacre. El gobierno estatal hizo lo propio: a través de un acuerdo sobre las determinaciones de desechamiento, la Comisión Estatal de Víctimas de Coahuila señaló que, en efecto, en 2017 la CEAV reconoció que sí le tocaba indemnizar a los afectados. Añadió que ellos no tenían dinero para hacerlo.

Una de las sobrevivientes de Allende, a quien le asesinaron a su marido y que hoy no puede exigir justicia de frente por temor a ser asesinada, reclama que lo sucedido “es una cosa que realmente nunca se supera, es insuperable, claro, pero aunado a eso le suman que te quieren volver loca, o sea, ellos [la CEAV] son un verdugo también. Te llevan a un punto de quiebre y yo pienso que es para que renuncies a todo”.

—¿Y la comisión de víctimas?

—Ha sido muy victimizante el hecho también que el principal verdugo de este sufrimiento es la CEAV, son los que más nos han oprimido y, como te digo, todavía de que les metimos un amparo se niegan y luego meten una revisión y nos llevan al límite. Retrasan todo el proceso, ellos ya deberían de tener un dictamen y no lo hacen —lamenta Silvia Garza.

Considera que si los gobiernos federal y estatal permitieron que les destruyeran la vida, tienen que pagarlo. Cuestiona que si se roban millones de pesos, cómo van a poder indemnizar a los afectados. Es lo mínimo que merecen porque sus muertos no van a regresar.

El abogado Jesús González Schmal, quien representa a Silvia y otras dos sobrevivientes de la masacre, lo dice sin miramientos: hasta Alejandro Encinas, en Arteaga, les dijo que recibirían conforme a la ley protección psicológica y que atendería a la obligación del Estado para pagar las indemnizaciones.

Explica que los sobrevivientes han estado en una situación de penuria durante todos estos años. Recuerda que desde 2017 la CEAV atrajo el caso, por lo cual la Federación se responsabilizó, pero “se quisieron lavar las manos”, dice Silvia. Coahuila es en donde tienen que atenderlos, pero se escudan diciendo que son “los de la comisión”.

No solo eso: a pesar de que González Schmal logró un amparo que obliga a la CEAV a dar explicaciones, esta dependencia interpuso un recurso de revisión, lo cual para el abogado “es una burla” porque alega que cumplieron con la obligación de pasarle el caso al gobierno de Coahuila. “No tienen vergüenza”, reprocha.

Aunque es difícil medir con cuánto dinero tendrían que indemnizar a las víctimas, Silvia Garza ofrece un panorama: destruyeron los ranchos, mataron a los animales, demolieron las casas, se robaron millones de pesos en maquinaria pesada, los contratos activos se perdieron y, por ende, los proyectos pendientes ya no existen.

“No me da la cabeza para decir un número. Todo cuenta, los planes a futuro, mi proyecto de vida destruido. Saben ellos que es mucho el daño, por eso se hacen tontos. No creo que haya una reparación integral tan grande como lo que nos quitaron”, dice a MILENIO. —

Olga Sánchez Cordero acudió a la localidad en 2019 a garantizar la reparación integral y el apoyo a las víctimas





ALFREDO SAN JUAN

